

Señores.

**JUZGADO NOVENO (09°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES.**

E. S. D.

**REFERENCIA:** **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**  
**PROCESO:** REPARACIÓN DIRECTA  
**RADICADO:** 17001-33-39-005-2019-00125-00  
**DEMANDANTES:** MARÍA YANETH CARDONA ACEVEDO Y OTROS.  
**DEMANDADOS:** MUNICIPIO DE MANIZALES – CORPOCALDAS  
**LLAMADO EN GARANTÍA:** ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTRO

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con cédula de ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, mediante el presente escrito procedo a **REASUMIR** el poder a mi conferido en el proceso de la referencia, y a presentar dentro del término legal, los **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**; solicitando desde ya, se profiera sentencia favorable a los intereses de mi representada, negando las pretensiones de la demanda por no haberse demostrado la responsabilidad administrativa que se pretendía endilgar al **MUNICIPIO DE MANIZALES** y a mi prohijada, con fundamento en los siguientes argumentos que concretaré en los acápites siguientes.

### **CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ALEGATOS.**

A través de auto No. 128 de fecha 04 de marzo de 2025, notificado el 05 de marzo de 2025, proferido por el Juzgado Noveno Administrativo Del Circuito de Manizales se ordenó el termino conjunto de 10 días para que las partes presenten Alegatos de Merito en Primera instancia conforme a lo previsto por el artículo 181 del CPACA. En ese sentido, dicho término transcurrió los días 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de marzo de 2025 (los días 08, 09, 15 y 16 marzo no se cuentan por ser días no hábiles), por lo que se concluye que este escrito es presentado dentro del tiempo previsto para tal efecto.

### **CAPÍTULO II. ASPECTO PREVIOS RELATIVOS A LA “IMPUTACIÓN”.**

Es importante precisar que el objeto del litigio aquí ventilado corresponde al fijado por el despacho en audiencia inicial, en los siguientes términos:

*La parte demandante pretende que, se declare administrativa y patrimonialmente responsables a Corpocaldas y al Municipio de Manizales, por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia del fallecimiento del señor Rosember Mauricio Cardona Acevedo en hechos ocurridos*

*el 19 de abril de 2017, durante un deslizamiento de tierra en la ladera del barrio Alto Persia de la ciudad de Manizales.*

*Aseguró que, a pesar de que el barrio Persia ha tenido antecedentes de deslizamientos y está categorizado como zona de alto riesgo y con presencia de erosión, el municipio de Manizales omitió tomar todas las medidas preventivas y correctivas a fin de mitigar el riesgo de deslizamiento de tierra o, en su defecto llevar a cabo las acciones necesarias que permitieran la evacuación y reubicación de los habitantes de este sector, razón por la cual, al momento de la catástrofe se perdieron varias vidas, entre ellas, la del señor Rosember Mauricio Cardona Acevedo.*

*Resaltó que, la Corporación Autónoma Regional de Caldas dentro del ámbito de su competencia omitió llevar a cabo la implementación y desarrollo de procesos ambientales de gestión del riesgo en el sector del barrio Persia, que contribuyeran a la prevención de la catástrofe presentada en dicha comunidad.”<sup>1</sup>*

## **I. ALEGATOS DE MERITO FRENTE A LO PROBADO EN LA DEMANDA**

### **A. SE ACREDITÓ LA FUERZA MAYOR COMO CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS.**

La demanda presentada busca que se declare la responsabilidad administrativa del Municipio de Manizales y Corpocaldas por el fallecimiento del señor Rosember Mauricio Cardona Acevedo (q.e.p.d.), ocurrido el 19 de abril de 2017 como consecuencia de un deslizamiento de tierra en el barrio Alto Persia, que destruyó la vivienda ubicada en la Calle 49 No. 32-10 Bis, en la que el señor Rosember Mauricio Cardona Acevedo se encontraba.

Los demandantes argumentan que las autoridades municipales tenían conocimiento de la inestabilidad del terreno y que, aun así, no adoptaron medidas preventivas adecuadas ni ordenaron la evacuación de los habitantes de la zona. No obstante, las pruebas aportadas al proceso demuestran lo contrario, pues evidencian que el evento fue causado por una situación de fuerza mayor, originada por las lluvias torrenciales sin precedentes registradas en la ciudad en esa fecha.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que la fuerza mayor es una circunstancia que exime de responsabilidad a la entidad demandada siempre que concurren los siguientes elementos:

1. Hecho externo: Una causa ajena a la actividad de la administración.
2. Hecho imprevisible: Un fenómeno que no podía anticiparse razonablemente.

<sup>1</sup> Acta de audiencia inicial No. 71 del 23 de mayo de 2024 del proceso con radicado No. 17001 33 39 005 2019 00125 00.

3. Hecho irresistible: Un suceso cuyas consecuencias no pudieron evitarse.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado:

*“(…) Adicionalmente, la prueba de un <Caso Fortuito> no exonera de responsabilidad a la entidad demandada en estos casos: lo que puede exonerarla es la demostración de una <Fuerza Mayor> entendida como una circunstancia ajena a la actividad de la entidad demandada a la cual pueda imputársele de manera exclusiva y determinante la causación del daño.”<sup>2</sup>*

Así mismo, ha indicado que:

*“La fuerza mayor sólo se demuestra mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa.”<sup>3</sup>*

En este caso, el deslizamiento de tierra ocurrió como consecuencia de una lluvia torrencial de magnitud excepcional, lo que cumple con los requisitos de hecho externo, imprevisible e irresistible. Respecto a lo señalado, los informes técnicos presentados en el proceso evidencian que las lluvias registradas los días 18 y 19 de abril de 2017 alcanzaron niveles sin precedentes en la ciudad de Manizales. La ingeniera Jeannette Zambrano Nájera, del Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental de Caldas (SIMAC), explicó que el índice A25, que mide la acumulación de precipitaciones en los 25 días previos, no había registrado valores de alerta antes del evento, lo que indica que no existían señales previas que permitieran prever el deslizamiento.

El documento obrante en el expediente denominado *“Análisis de la información de los eventos de lluvia presentados los días 18 y 19 de abril de 2017 en la ciudad de Manizales”*, suscrito por la Universidad Nacional de Colombia, señala:

*“El día 19 de abril, recién pasada la medianoche (00:38) se inició un nuevo evento de lluvia que se prolongó en algunos sectores de la ciudad hasta las 06:53 de la mañana; este nuevo evento fue aún más intenso y de mayor magnitud que el mencionado anteriormente (...). Con magnitudes en milímetros de 156.2, 145.5, 143.6, 103.2 y 102 respectivamente, alcanzando cifras récord por encima de los 150 mm para la ciudad.”*

En dicho análisis se indicó fluctuantes entre 5.2 mm en la estación Milán-Planta Niza y 60.6 mm en La Palma, duraciones (entre 55 minutos en La Nubia y dos horas y media en La Palma) e intensidades (entre 5.2 mm/h en Milán-Planta Niza y 28.1 mm/h en Emas). Igualmente en los sectores centro, centro sur y Norte (estaciones Hospital de Caldas, Liceo Isabel La Católica, Q. Palogrande-Ruta 30, Yarumos y Q. El Guamo-Lavadero Los Puentes), con magnitudes en milímetros de 156.2, 145.5, 143.6, 103.2 y 102, respectivamente, alcanzando cifras récord por

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Martín Bermúdez Muñoz - Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021) - Radicación número: 68001-23-33-000-2012-00197-01(50543).

<sup>3</sup> (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 12423. Ver en igual sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13090.

encima de los 150 mm para la ciudad. Además, se alcanzaron registros importantes de intensidad media con una máxima de 28.8 mm/h en la estación Hospital de Caldas y de intensidad máxima en 5 minutos de 134.4 mm/h en Q. El Guamo-Lavadero Los Puentes, muy cercano éste al valor histórico de 140 mm/h obtenido en octubre 27 de 2010 en la estación Ingeominas (sector occidente) como se evidencia:

Otros eventos catastróficos hidrometeorológicos en Manizales. Fecha evento	Duración (horas)	Magnitud (mm)	Intensidad máxima en cinco minutos (mm/hr)	A25 (mm)
Oct. 28-29 2003	5 - 10	34 - 130		188-403
Dic. 3-4 2003	0.5 - 1.75	12-37	94.44	208-292
Jun. 10 2005	3.8 - 7.4	45.97 - 149.86		291-379.5
<b>Nov. 14-18 2008:</b>				
Zona centro-oriente y nor-oriente	10 y 12.75	82.4 y 142.75	79.2	Max 320
Zona occidente y nor-occidente	7.25 y 10.6	34.55 y 80.78	73.08	
Zona sur y sur-oriente	10 y 11	53.2 y 61.21	81.6	

**Tomado de informe IDEA – UNAL Manizales**

Esto confirma que no existían antecedentes de precipitaciones de esta magnitud, por lo que el evento fue imprevisible.

Por su parte, el ingeniero Jhon Jairo Chisco, funcionario de Corpocaldas para la fecha de los hechos, manifestó en su declaración del 24 de julio de 2024 que no hubo represamiento de aguas en la ladera y que el deslizamiento superó los muros de contención existentes. Además, indicó que nunca se había registrado un evento similar en la zona, razón por la cual no existían indicios que sugirieran la necesidad de obras adicionales.

Para que un hecho sea considerado fuerza mayor, además de ser externo e imprevisible, debe ser irresistible, es decir, imposible de evitar.

El Consejo de Estado ha explicado que:

*“(...) la exterioridad de la causa extraña (...) no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad (...). La exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada (...)”<sup>4</sup>*

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de marzo de 2008).

Frente a esto, El ingeniero civil Freddy Leonardo Franco Idagarra, experto en medio ambiente urbano y docente en la Universidad Nacional de Manizales, testificó sobre las intensas lluvias del 18 y 19 de abril de 2017, las más fuertes en 30 años. Como director del IDEA en esa época, emitió un boletín extraordinario alertando a la ciudad. Explicó que en solo 4 horas cayeron 150 mm de lluvia, causando deslizamientos, especialmente en la vertiente sur. También aclaró que este evento fue inesperado y no producto de una acumulación prolongada de lluvias, y destacó la falta de equipos de predicción meteorológica en la ciudad.

En el mismo sentido, en audiencia de pruebas el testigo Mauricio Fernando Saavedra, ingeniero civil y especialista en geotecnia de CORPOCALDAS, declaró que la emergencia fue causada por lluvias intensas en un corto período. Como funcionario de la corporación, visitó varias zonas afectadas. Respecto al barrio Persia, confirmó que los deslizamientos fueron consecuencia de la saturación de taludes y laderas debido a la acumulación rápida de lluvia, lo que provocó desprendimientos de tierra desde la parte alta de la ladera, siendo este imprevisible en ese momento.

Finalmente, de los elementos probatorios analizados se determina que el deslizamiento de tierra del 19 de abril de 2017 fue consecuencia de un evento natural atípico, imprevisible e irresistible, lo que configura una situación de fuerza mayor. En consecuencia, no existe fundamento jurídico para atribuir responsabilidad al Municipio de Manizales o a Corpocaldas, ya que el daño sufrido no se derivó de una acción u omisión de la administración, sino de un fenómeno natural que escapa a su control. Dado que la fuerza mayor rompe el nexo causal necesario para estructurar la responsabilidad del Estado, las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas.

## **B. SE PROBÓ LA INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**

En el marco del presente litigio, la parte actora sostiene que las entidades demandadas incurrieron en una falla en el servicio al no adoptar medidas preventivas frente al riesgo de deslizamientos y al omitir la reubicación de los habitantes del barrio Alto Persia, en la ciudad de Manizales. No obstante, el acervo probatorio recaudado demuestra que no hubo ninguna omisión constitutiva de responsabilidad atribuible al Municipio de Manizales, puesto que dicha entidad cumplió con todas las obligaciones que le competían en los ámbitos legal, contractual y judicial.

Desde el punto de vista jurídico, es fundamental recordar que el régimen de responsabilidad subjetiva, además de ser la regla general en materia de responsabilidad del Estado, impone a la parte demandante la carga de probar los elementos estructurales de la imputación. En este sentido, la parte actora debe aportar material probatorio suficiente para demostrar los hechos en que fundamenta su reclamación. Sin embargo, en el presente caso, no existe evidencia que permita

configurar los elementos esenciales de la responsabilidad estatal que se pretende atribuir al Municipio de Manizales.

El análisis de las circunstancias fácticas del caso y de las pruebas aportadas al expediente permite concluir que no se acredita un incumplimiento por parte del ente demandado que haya sido determinante en la producción del lamentable accidente. En consecuencia, no hay certeza alguna sobre la existencia de un factor de atribución que justifique una declaración de responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado. Además, no se presenta ninguna prueba que evidencie una falla del servicio derivada de la omisión de alguna obligación concreta que la administración haya dejado de cumplir y que haya sido determinante en la ocurrencia del daño. Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado:

*“Al tenor del artículo 90 de la Constitución Política, quien pretenda el resarcimiento patrimonial de un daño, por parte del Estado, debe probar que sufrió afectación en un bien jurídicamente tutelado, pero, además, demostrar que dicha afectación es antijurídica, y que le es atribuible a aquel por causa de la acción u omisión de las autoridades públicas. De esta forma la norma constitucional en comento, esboza el trazado de la estructura de la responsabilidad patrimonial del Estado con integración de los tres elementos que de antaño se reconocen como indispensables y necesarios para que se predique de un sujeto que es patrimonialmente responsable: el daño, el hecho que lo genera y el nexo de causalidad que permite la imputación fáctica y jurídica al sujeto activo del daño. La atribución de responsabilidad pende, entonces, de esa relación causal que denota la fórmula constitucional cuando alude al daño que tiene causa en la acción u omisión de las autoridades públicas...”<sup>5</sup>*

El Municipio de Manizales demostró haber actuado con diligencia y cumplimiento de sus deberes en materia de gestión del riesgo, lo que se evidenció en la implementación de un sistema de monitoreo y alerta temprana, la instalación de estaciones meteorológicas, la ejecución de obras de estabilización y manejo de aguas, así como en la realización de mantenimientos preventivos y correctivos a través del programa “Guardianes de la Ladera”. Estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal con la mitigación de riesgos y desvirtúan cualquier acusación de omisión en la toma de medidas preventivas. En este contexto, la argumentación planteada por la parte actora carece de sustento probatorio y, por ende, no constituye una base válida para estructurar la responsabilidad del ente territorial. Es crucial enfatizar que en derecho, los señalamientos sin evidencia fáctica y jurídica no tienen la capacidad de generar consecuencias imputables a la administración pública.

Asimismo, se debe resaltar que las pruebas obrantes en el expediente están orientadas a acreditar la existencia del deslizamiento de tierra ocurrido en abril de 2017, pero no su imputabilidad al Municipio de Manizales. En otras palabras, no existe material probatorio que permita establecer un nexo causal entre la acción u omisión de la administración y el daño alegado. Como se expuso en el apartado anterior, la configuración de un caso fortuito interrumpe la relación causal y excluye la posibilidad de imputar responsabilidad a las entidades demandadas.

---

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Exp. (52814).

Dado lo anterior, se concluye que la parte actora no logró acreditar los elementos estructurales de la responsabilidad del Estado, los cuales incluyen la existencia del daño y su imputabilidad a la entidad demandada. Al no haberse probado estos elementos, no es viable declarar la responsabilidad patrimonial del Municipio de Manizales ni de las demás entidades demandadas, por lo que las pretensiones de la demanda deben ser desestimadas en su totalidad.

### **C. IMPROCEDENTE RECONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS MORALES SOLICITADOS POR LA PARTE DEMANDANTE**

De acuerdo a lo probado en el plenario, se logró evidenciar que no existe responsabilidad frente al Municipio de Manizales sobre los hechos de la demanda, ni mucho menos en contra de mi prohijada, por cuanto no se integró por la parte actora los medios de pruebas fehacientes para demostrar la causación del perjuicio alegado. Las pruebas recaudadas no otorgan una convicción real sobre la producción, naturaleza, y de la cuantía del supuesto detrimento patrimonial irrogado, el cual, al no ser objeto de presunción, no puede ser reconocido sin mediar pruebas fehacientes de su causación.

Por un lado, en el *Sub iudice* se pretende el reconocimiento de perjuicios morales para: MARIA YANETH CARDONA ACEVEDO en calidad de hermana del señor ROSEMBER MAURICIO CARDONA ACEVEDO; MARTHA CECILIA CARDONA ACEVEDO en calidad de hermana del señor ROSEMBER MAURICIO CARDONA ACEVEDO; JHON JAIRO CARDONA ACEVEDO en calidad de hermano del señor ROSEMBER MAURICIO CARDONA ACEVEDO y MARIA YOLANDA CARDONA ACEVEDO en calidad de hermana del señor ROSEMBER MAURICIO CARDONA ACEVEDO. Cada uno de los anteriores solicitó el pago de 50 SMMLV, por lo cual, solicito al despacho tengan en cuenta las pautas establecidas por el H. Consejo de estado Sala de lo Contencioso Administrativa-Sección Tercera, en su Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 Rad. No 66001-23- 31-000-2001-00731-01 exp.26251 C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa, donde se determinan los criterios generales que se deben de tener en cuenta para la liquidación de este perjuicio en caso de muerte.

Además, se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales para: MARCELA CALLE CARDONA, ANGIE MILENA CALLE CARDONA, MICHAEL CALLE CARDONA, VANESA CARDONA OSORIO, XIMENA CARDONA OSORIO, YONATAN VALENCIA CARDONA, NINY JOHANNA VALENCIA CARDONA, todos en calidad de sobrinos (tercer grado de consanguinidad) del señor ROSEMBER MAURICIO CARDONA ACEVEDO. Frente a lo anterior, es menester recordar que el H. Consejo de estado Sala de lo Contencioso Administrativa-Sección Tercera, en su Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 Rad. No 66001-23- 31-000-2001-00731-01 en la que señaló que, Para los niveles 3 y 4, además (de la prueba del estado civil), se requerirá la prueba de la relación afectiva.

En el caso que nos ocupa se avizora que NO existe prueba alguna, ni documental ni testimonial,

que permita establecer la relación afectiva entre los demandantes MARCELA CALLE CARDONA, ANGIE MILENA CALLE CARDONA, MICHAEL CALLE CARDONA, VANESA CARDONA OSORIO, XIMENA CARDONA OSORIO, YONATAN VALENCIA CARDONA, NINY JOHANNA VALENCIA CARDONA y el finado, señor ROSEMBER MAURICIO CARDONA ACEVEDO, así mismo, los demandantes no asistieron a la diligencia de practica de pruebas fijada por el despacho para el día 31 de enero de 2025, en la que se practicaría el interrogatorio de parte de los señores, MARÍA YANETH CARDONA ACEVEDO, MARCELA CALLE CARDONA, MARTHA CECILIA CARDONA ACEVEDO, ANGIE MILENA CALLE CARDONA, MICHAEL CALLE CARDONA, JHON JAIRO CARDONA ACEVEDO, VANESA CARDONA OSORIO, XIMENA CARDONA OSORIO, MARÍA YOLANDA CARDONA ACEVEDO, YONATAN VALENCIA CARDONA y NINI JOHANA VALENCIA CARDONA, por lo que se toman como ciertos los hechos susceptibles de confesión consagrados en las contestaciones de la demanda de las llamadas en garantía, ALLIANZ SEGUROS S.A. como de AXA COLPATRIA SEGUROS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del CGP.

En virtud de lo expuesto y analizado en el presente proceso, resulta improcedente el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados por la parte demandante. La ausencia de prueba fehaciente que demuestre el daño alegado y su relación con la presunta responsabilidad del Municipio de Manizales impide su reconocimiento. Por una parte, los demandantes no lograron acreditar la existencia de un vínculo afectivo con el fallecido en los términos exigidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente para los familiares en tercer grado de consanguinidad, quienes debían demostrar una relación cercana y significativa con la víctima. Además, la inasistencia de los demandantes a la diligencia de interrogatorio de parte refuerza la falta de pruebas que permitan inferir la afectación moral sufrida.

En consecuencia, al no haberse demostrado con los medios probatorios disponibles la causación del perjuicio ni su impacto real sobre los demandantes, no hay fundamento jurídico para ordenar el pago de los perjuicios reclamados.

### **CAPÍTULO III. ANÁLISIS FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE MANIZALES**

#### **A. RESULTÓ PROBADA LA FALTA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 021984159, EN VISTA DE LA CONFIGURACIÓN DE EXCLUSIONES DE AMPARO PACTADAS**

Los demandantes buscan una compensación por los perjuicios sufridos a raíz del deslizamiento de tierra ocurrido el 19 de abril de 2017 en el barrio Alto Persia de Manizales, el cual, según afirman, causó la muerte del señor **Rosemberto Mauricio Cardona Acevedo** causándoles perjuicios morales.

En respuesta, el Municipio de Manizales solicitó la vinculación de mi representada, **Allianz Seguros**

S.A., en calidad de garante, con base en la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 021984159. No obstante, tras el análisis de los hechos y las pruebas del proceso, se concluye que dicha póliza no es aplicable, ya que excluye expresamente la cobertura de responsabilidad civil por daños causados por deslizamientos de tierra, aludes y otros fenómenos naturales, lo que impide su aplicación en este caso.

Sobre la aplicación de las exclusiones dentro del proceso, el Consejo de Estado ha dicho que:

*“(…)… el juez de la reparación tiene la obligación de analizar de manera integral y acuciosa todos los elementos probatorios allegados legal y oportunamente al proceso, no solo para efectos de determinar si debe condenarse administrativa y patrimonialmente al Estado por los perjuicios causados a la víctima, **sino también para definir si en ese caso hay lugar a exigirle al llamado en garantía la indemnización del perjuicio que llegará a sufrir el llamante como producto de la sentencia, en virtud de la relación contractual que los conecta.***

*En esos términos, este juez constitucional encontró que la póliza N.º 12-03-101000300 que suscribieron Seguros del Estado S.A. y el Hospital Occidente de Kennedy E.S.E. fue aportada no solo por la compañía aquí tutelante, **sino también por el hospital condenado en su escrito de llamamiento en garantía y que, de la lectura de dicho documento, se advierte que, en efecto, una de las exclusiones pactadas en el contrato son las reclamaciones por organismos patogénicos (...)***

*En esos términos, la Sala encuentra configurado el defecto fáctico planteado, teniendo en cuenta que en el proceso de reparación directa que iniciaron la señora [L.U.S.] y sus hijos, se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado en cabeza del Hospital Occidente de Kennedy, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por los perjuicios morales y a la salud, derivados de la infección por agentes patogénicos o bacterias que contrajo la paciente en las instalaciones hospitalarias y que, en virtud de lo pactado en la citada póliza de seguros, se ordenó a la compañía Seguros del Estado S.A. reintegrar lo pagado por el centro de salud en virtud de la condena que le fue impuesta, siendo que las reclamaciones por organismos patogénicos no se encontraban amparadas en el citado acuerdo”.<sup>6</sup> (Negrilla fuera de texto).*

En la póliza analizada se establecieron exclusiones que restringen la cobertura de responsabilidad civil extracontractual. En este caso, se ha demostrado que algunas de esas exclusiones son aplicables, lo que libera a la aseguradora de la obligación de indemnizar el siniestro, mismas que están redactadas en idioma español, entendibles, señaladas después de la enunciación o título de amparos y no son subrepticias, que fueron conocidas y consentidas por el municipio contratante desde el momento mismo de contratación de la póliza. En particular, se consignaron las siguientes:

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de mayo de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2020-04405-01

#### Cauciones Judiciales

LA COMPAÑÍA reconocerá el costo de las cauciones en relación al proceso que se adelante como consecuencia de un daño amparado en la póliza. Las Cauciones serán cubiertas dentro del Límite de Indemnización y no en adición al mismo. Los pagos realizados por este concepto reducirán el monto del Límite de Indemnización. No obstante LA COMPAÑÍA no estará obligada a expedir dichas cauciones.

#### SECCION SEGUNDA- EXCLUSIONES

##### GENERALES

- A. Salvo que esté expresamente contratada la cobertura, esta póliza excluye la pérdida y cualquier tipo de siniestro, daño, costo o gasto de cualquier naturaleza éste fuese, que haya sido causado directa o indirectamente por las siguientes causas:
- Dolo o culpa grave del asegurado o sus representantes.
  - Reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radioactiva. Riesgos atómicos y nucleares, salvo el empleo autorizado en la medicina y en los equipos de medición.
  - Guerra internacional o civil y actos perpetrados por agentes extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (sea o no declarada una guerra), rebelión y sedición.
  - Asonada según su definición en el código penal; motín o conmoción civil o popular; huelgas, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hecho de labores; actos mal intencionados de terceros que incluyen actos de cualquier naturaleza cometidos por movimientos subversivos.
  - Fenómenos de la naturaleza tales como: terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami, huracán, ciclón, tifón, tornado, tempestad, viento, desbordamiento y alza del nivel de aguas, inundación, lluvia, granizo, estancación, hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, caída de rocas, aludes, y demás fuerzas de la naturaleza.

- Vibración del suelo, debilitamiento de cimientos o bases, asentamiento, variación del nivel de aguas subterráneas.

- Daños originados por la acción paulatina de aguas.

A lo largo del proceso, ha quedado claro que la parte demandante busca una indemnización por los perjuicios derivados del deslizamiento de tierra ocurrido el 19 de abril de 2017 en el barrio Alto Persia de Manizales, provocado por las intensas lluvias registradas desde el día anterior.

En el supuesto de que se considerara viable una acción basada en este daño y se atribuyera responsabilidad al Municipio de Manizales, me es dable precisar que dicha situación se encuentra expresamente excluida en el contrato de seguro suscrito entre el Municipio de Manizales y Allianz Seguros S.A., conforme a la cláusula precitada. En ese orden, solicito respetuosamente que se reconozca la aplicación de estas exclusiones y, en consecuencia, se exonere a mi representada de cualquier obligación indemnizatoria.

En conclusión, resulta evidente que Allianz Seguros S.A. no está obligada a responder por los perjuicios reclamados en la demanda, ya que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

vinculada al proceso contempla al menos tres exclusiones aplicables en este caso, las cuales impiden su cobertura. Por lo tanto, no puede imputarse responsabilidad alguna a la compañía aseguradora dentro de este proceso, lo que confirma la falta de cobertura material del contrato de seguro que sirvió de fundamento para su vinculación.

**A. SE ACREDITÓ LA FALTA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 021984159 POR APLICACIÓN DE LAS EXCLUSIONES PACTADAS**

El contrato de seguro contenido en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 021984159 establece con claridad los términos bajo los cuales la aseguradora asume la obligación de indemnizar los perjuicios que cause el asegurado a terceros. En su cobertura básica, se indica expresamente que el seguro cubre la responsabilidad civil extracontractual en que pueda incurrir el asegurado, siempre y cuando el daño sea consecuencia de un siniestro imputable a este y que se encuentre dentro de los parámetros definidos en la ley.

No obstante, la póliza en cuestión también dispone de una serie de exclusiones, las cuales determinan de manera concreta los eventos que no son objeto de cobertura:

*“Salvo que esté expresamente contratada la cobertura, esta póliza excluye la pérdida y cualquier tipo de siniestro, daño, costo o gasto de cualquier naturaleza, este fuese, que haya sido causado directa o indirectamente por las siguientes causas:*

*(...)*

*- Fenómenos de la naturaleza tales como: terremoto, temblor, erupción, volcánica, maremoto, tsunami, huracán, ciclón, tifón, tomado, tempestad, viento, desbordamiento y **alza del nivel de aguas, inundación, lluvia, granizo. Estancación, hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, caída de rocas, aludes y demás fuerzas de la naturaleza.***

*- Vibración del suelo, debilitamiento de cimientos o bases, asentamiento, variación del nivel de aguas subterráneas.*

*- Daños originados por la acción paulatina de aguas.”*

En este sentido, el contrato de seguro estipula que, salvo que se haya contratado expresamente una cobertura adicional, quedan excluidos de la póliza cualquier tipo de pérdida, siniestro, daño, costo o gasto derivado directa o indirectamente de fenómenos naturales. Entre estos eventos, se incluyen el aumento del nivel de las aguas, inundaciones, lluvias, granizo, hundimiento del terreno y deslizamientos de tierra, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental analizar si los hechos del caso concreto encajan dentro del ámbito de cobertura previsto en la póliza o si, por el contrario, se encuentran dentro de las exclusiones expresamente contempladas. En el presente proceso, ha quedado debidamente

acreditado que los daños cuya reparación se reclama derivan de un fenómeno natural, específicamente de un deslizamiento de tierra ocurrido en el barrio Alto Persia de la ciudad de Manizales. Este hecho, como se señaló anteriormente, se encuentra excluido de manera expresa en la póliza, lo que impide que la aseguradora asuma responsabilidad por los perjuicios alegados.

Por lo tanto, resulta jurídicamente improcedente pretender que mi representada sea condenada al pago de indemnización alguna, ya que esto iría en contra de lo expresamente pactado en el contrato de seguro. No puede perderse de vista que el artículo 1056 del Código de Comercio establece que el asegurador tiene la facultad de delimitar los riesgos que decide cubrir y que, en consecuencia, no puede ser obligado a asumir eventos que se encuentran fuera de la cobertura pactada. La ley otorga al asegurador la potestad de evaluar y seleccionar los riesgos que está dispuesto a cubrir, conforme a sus políticas comerciales y técnicas de aseguramiento, lo que refuerza la improcedencia de la reclamación en este caso.

En caso similar al que hoy nos ocupa, en el que los hechos en que se funda la demanda se encuentran encuadrados en una exclusión del contrato de seguro, el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES en sentencia de fecha 04 de octubre de 2024, dentro del proceso con radicado 2024 – 00122 señaló que:

“La póliza No póliza 21984159 de 2016, en las condiciones particulares, concretamente en las cláusulas contractuales señala que cubre los perjuicios que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad civil extracontractual *“derivada de los perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) y/o extrapatrimoniales (daños morales, fisiológicos, a la salud y a la vida en relación), ocasionados en el desarrollo de las actividades propias del asegurado, de las complementarias a dichas actividades, de las especiales que desarrolle aún sin conexión directa con su función principal...”* .

No obstante lo anterior, en las condiciones generales del contrato de seguro en la sección segunda, se determinaron las exclusiones de la cobertura de la póliza señalándose lo siguiente:

“... ”

**SECCION SEGUNDA - EXCLUSIONES  
GENERALES**

*A. Salvo que esté expresamente contratada la cobertura, esta póliza excluye la pérdida y cualquier tipo de siniestro, daño, costo, o gasto de cualquier naturaleza éste fuese (sic), que haya sido causado directa o indirectamente por las siguientes causas:*

“... ”

*Fenómenos de la naturaleza tales como: terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsumani, huracán, ciclón, tifón, tornado, tempestad, viento, desbordamiento y alza del nivel de aguas, inundación, lluvia, granizo, estancación, hundimiento del terreno, **deslizamiento de tierra, caída de rocas, aludes y demás fuerzas de la naturaleza. ...**” – Destacado no es del texto-*

En este sentido, al encontrarse estructurada una exclusión convencional en la póliza, no existe la obligación contractual de la aseguradora ALLIANS SEGUROS S.A., de reembolsar lo que debe pagar el Municipio de Manizales en virtud de la condena impuesta en su contra, y por tal motivo se declarará probada la excepción denominada “Exclusiones de la póliza”.

En virtud de lo expuesto, resulta evidente que los hechos de la demanda no se encuentran dentro del ámbito de cobertura de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por Allianz Seguros S.A. Por el contrario, han quedado categóricamente excluidos del seguro, al tratarse de un siniestro originado por un fenómeno natural. Como consecuencia de ello, no existe fundamento jurídico que justifique una condena en contra de mi representada, pues esta no está obligada a asumir la indemnización de un evento que no ha sido asegurado.

Aceptar una condena en estas circunstancias no solo vulneraría el principio de la autonomía de la voluntad, pilar fundamental de la contratación, sino que también iría en contra de las normas que regulan el contrato de seguro en Colombia, las cuales establecen que la cobertura solo puede extenderse a aquellos riesgos que han sido expresamente aceptados por el asegurador. Por lo tanto, cualquier pretensión encaminada a obtener una indemnización con cargo a mi representada debe ser desestimada en su totalidad.

**B. RESULTÓ PROBADO QUE NO EXISTE REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR LO TANTO, NO ES EXIGIBLE NINGUNA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A LA ASEGURADORA.**

Dentro del presente proceso, no se ha logrado demostrar que el Municipio de Manizales tenga responsabilidad en los presuntos perjuicios alegados por la parte demandante. Como se ha expuesto en reiteradas oportunidades a lo largo del proceso, no existe prueba suficiente que permita concluir que el Ente Territorial haya incurrido en una acción u omisión generadora de los daños reclamados. En consecuencia, si el Municipio no es responsable de los hechos, tampoco puede considerarse que la aseguradora deba asumir el pago de una indemnización derivada de un riesgo que, aunque fue trasladado al seguro, no se configuró como un siniestro en los términos establecidos en la póliza.

El concepto de riesgo dentro del ámbito del derecho de seguros tiene una connotación particular. Tal como lo señala el profesor Andrés Ordóñez, el riesgo asegurable corresponde exclusivamente al denominado "*riesgo puro*", es decir, aquel que se concreta en hechos dañosos que pueden afectar la integridad física de una persona o su patrimonio (Ordóñez Ordóñez, 2008, p. 11). En este sentido, el riesgo de beneficio o ganancia no es susceptible de aseguramiento, así como tampoco lo es el riesgo especulativo, en el cual existe la posibilidad tanto de pérdida como de ganancia. Complementando lo anterior, el profesor López Blanco define el riesgo en el contrato de seguro como "*la incertidumbre que puede referirse a si el suceso se presentará o no, o cuándo ocurrirá, si fatalmente sucederá*" (López Blanco, 2014, p. 156).

Esta noción es recogida por el artículo 1054 del Código de Comercio, el cual define el riesgo asegurado como "*el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador,*

*del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador". A partir de esta definición, se desprende que, para que una aseguradora tenga la obligación de indemnizar, es indispensable que el riesgo asegurado efectivamente se materialice.*

En el contrato de seguro contenido en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 021984159, se pactó expresamente que su objeto es otorgar cobertura al asegurado en caso de que un tercero le exija una indemnización por un siniestro que le sea imputable y que haya ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, conforme a las disposiciones del derecho colombiano en materia de responsabilidad civil extracontractual. No obstante, en el presente caso, como se ha reiterado, no se demostró dentro del proceso que el Municipio de Manizales haya sido el causante de los hechos que originaron la demanda, ni que de su actuación u omisión se hubieran derivado los perjuicios reclamados. En consecuencia, el riesgo asegurado no se configuró y, por tanto, no existe fundamento jurídico para que la aseguradora asuma la indemnización solicitada.

La estructura misma del contrato de seguro exige que, para que surja la obligación de indemnizar, se cumpla la condición esencial de que el siniestro efectivamente ocurra. En este caso, no se han acreditado los elementos que permitan establecer la responsabilidad del asegurado, lo que impide afectar la póliza de seguro como pretende la parte demandante. En otras palabras, al no haberse materializado el riesgo asegurado, no se ha estructurado un siniestro que active la obligación contractual de resarcimiento a cargo de mi representada.

Sobre este punto, el artículo 1072 del Código de Comercio es claro al definir el siniestro como *"la realización del riesgo asegurado"*. Dado que en este caso el riesgo asegurado no se ha concretado, pues no hay pruebas que demuestren una conducta imputable al Municipio de Manizales que haya dado lugar a los hechos objeto de la demanda, no se configuran los elementos que darían lugar a la obligación de la aseguradora de asumir el pago de una indemnización.

A la luz del análisis expuesto, es evidente que no se cumplen las condiciones establecidas en la Póliza de Seguro No. 021984159 para que surja la obligación de la aseguradora de responder por los perjuicios alegados por la parte demandante. No se acreditó en el expediente que el Municipio de Manizales haya incurrido en una conducta generadora de los daños reclamados, lo que impide que el evento pueda considerarse como un siniestro en los términos del contrato de seguro.

**C. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE ALLIANZ SEGUROS S.A. NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 021984159**

Las condiciones determinadas en el contrato de seguros son obligaciones contraídas por la compañía aseguradora exclusivamente expresadas en su texto, las cuales por ningún motivo se podrán desconocer.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1079 del Código de Comercio: “El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”

Por lo tanto, y sin que se constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada, en el remoto evento de que prosperaren una o algunas de las pretensiones de la demanda, debe tenerse en cuenta que el despacho no podrá condenar a mi representada a pagar una suma mayor a la asegurada. De ninguna manera, el demandante podrá obtener una compensación más allá del límite de la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza suscrita con el Municipio de Manizales, que para el presente caso corresponde a los siguientes valores:

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 021984159:

Coberturas contratadas		
Coberturas	Límite Asegurado Evento	Límite Asegurado Vigencia
1.Predios, Labores y Operaciones	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2.RC Contratistas y subcontratistas independientes	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
3.RC Patronal	1.200.000.000,00	2.400.000.000,00
4.RC Vehículos Propios y No Propios	750.000.000,00	1.500.000.000,00

Siendo esos los límites máximos de responsabilidad de la compañía por todos los daños y perjuicios causados como consecuencia de todos los siniestros ocurridos durante la vigencia de los seguros. Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al honorable despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado, y que el contrato de seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

**D. PORCENTAJE DEL DEDUCIBLE ESTABLECIDO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 021984159**

Sin perjuicio de lo expuesto y sin que implique el reconocimiento alguno a cargo de mi representada, es menester señalar que en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 021984159, se pactaron los siguientes deducibles los cuales corresponderán al valor que de cada pérdida debe asumir el asegurado de su propio peculio:

Deducibles

Nota aclaratoria: Solo se tendrán en cuenta los deducibles expresados sobre el valor de la pérdida o sin deducible, tal y como se detallan a continuación. Cualquier otra alternativa distinta a la solicitada que desmejore las condiciones propuestas, tendrá cero (0) puntos para ese deducible.

Parqueaderos 10% valor pérdida mínimo 1 smmlv

Demás evento 10% valor pérdida mínimo 1 smmlv

Gastos médicos: y gastos de defensa Sin aplicación de deducible

Sobre el asunto, la Superintendencia Financiera de Colombia en el concepto No. 2008065573-001 ha sido clara en definir en qué consiste el deducible, indicando:

*“En efecto, la Sección I del Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio, en su artículo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar, mediante cláusulas especiales, que el asegurado “...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño”. Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado. En este orden de ideas, correspondería a las partes en el contrato de seguro determinar el porcentaje de la pérdida que sería asumido por el asegurado a título de deducible, condición que se enmarcaría dentro de las señaladas por el numeral 11 del artículo 1047 del Código de Comercio al referirse a “Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes”.*

Es así que es procedente, Honorable Juez que se realice un análisis detallado de lo dispuesto por la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 021984159 por lo que ruego al despacho tener en cuenta cada una de las condiciones establecidas en la póliza en comento, haciendo especial hincapié en la suma amparada mediante el contrato y al deducible pactado en el mismo. De igual manera, solicito que en el remoto evento de que se llegare a hacer efectivo el llamamiento en garantía se apliquen todas y cada una de las cláusulas y condiciones del contrato de seguro.

**E. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE ALLIANZ SEGUROS S.A. SE LIMITA AL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL COASEGURO**

**PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.  
021984159 – INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD**

Dentro del presente proceso, la Póliza de Seguro No. 021984159, contratada por el Municipio de Manizales y utilizada como fundamento del llamamiento en garantía, fue suscrita bajo la modalidad de coaseguro. Este mecanismo implica la distribución del riesgo asegurado entre varias compañías aseguradoras, lo que en este caso particular se estableció de la siguiente manera: AXA COLPATRIA S.A. asumiendo el 40% del riesgo y ALLIANZ SEGUROS S.A. cubriendo el 60%.

El coaseguro, como figura jurídica, permite que varios aseguradores se repartan el riesgo derivado de un mismo contrato de seguro, de acuerdo con las proporciones pactadas entre las partes. En consecuencia, si bien cada aseguradora asume una porción del riesgo, no existe entre ellas un vínculo de solidaridad, lo que significa que cada una es responsable únicamente en la medida del porcentaje que le corresponde.

Este principio tiene su fundamento en el artículo 1092 del Código de Comercio, que establece que, en casos donde coexistan varios seguros, los aseguradores deben soportar la indemnización correspondiente en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe en la contratación. A su vez, el artículo 1095 del mismo Código señala expresamente que esta regla también es aplicable a la figura del coaseguro, definiéndolo como un acuerdo mediante el cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su consentimiento previo, se distribuyen la cobertura de un seguro determinado.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en afirmar que, en los casos en los que se configura un coaseguro, cada asegurador responde únicamente en la proporción que ha asumido dentro del contrato. Específicamente, ha señalado que el riesgo asegurado se divide entre los coaseguradores conforme a los porcentajes pactados, sin que pueda hablarse de solidaridad entre ellos. De esta manera, cada compañía solo está obligada a responder dentro de los límites de su participación en el contrato de seguro.

A la luz de lo anterior, es evidente que, en el hipotético e improbable escenario en el que el Municipio de Manizales fuese condenado al pago de una indemnización a favor de la parte demandante, dicha condena no podría ser asumida en su totalidad por mi representada. Por el contrario, cualquier eventual obligación de resarcimiento debería ser distribuida entre los coaseguradores de acuerdo con los porcentajes que cada uno asumió en la póliza.

En consecuencia, queda claro que, aun en el caso de que prosperaran las pretensiones de la parte demandante, no sería jurídicamente viable imponer una condena íntegra en contra de mi representada. Conforme a lo establecido en el Código de Comercio y a la doctrina jurisprudencial sobre el tema, el coaseguro implica una distribución del riesgo asegurado sin que pueda predicarse

la existencia de solidaridad entre las aseguradoras participantes.

Por lo tanto, en caso de una eventual condena, la obligación de indemnizar no podría ser asumida en su totalidad por una sola aseguradora, sino que cada una respondería exclusivamente en la proporción del riesgo que asumió. En el caso concreto de la póliza No. 021984159, ello significa que, de existir algún monto indemnizatorio a cargo del seguro, AXA COLPATRIA S.A. respondería por el 40%, mientras que ALLIANZ SEGUROS S.A. asumiría el 60%. Así las cosas, cualquier pretensión que busque trasladar la totalidad de la responsabilidad a mi representada debe ser rechazada, pues contravendría tanto las normas legales como la propia naturaleza del contrato de coaseguro.

#### **F. EL CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DE LOS CONTRATOS DE SEGURO.**

Dentro del régimen jurídico que rige el contrato de seguro, uno de sus principios fundamentales es su carácter esencialmente indemnizatorio. En otras palabras, los contratos de seguro de daños no tienen como finalidad generar una ganancia o beneficio económico para el asegurado, sino que buscan reparar, dentro de los límites pactados, el menoscabo que sufra el patrimonio del asegurado a consecuencia de la materialización del riesgo asegurado.

En este sentido, el contrato de seguro tiene como objetivo principal la protección de los bienes o del patrimonio de una persona que pueda verse afectada directa o indirectamente por la ocurrencia de un siniestro. Como consecuencia lógica de este principio, la indemnización derivada de la ocurrencia del evento asegurado nunca podrá ser superior al valor efectivamente asegurado, ya que de lo contrario, se desnaturalizaría la esencia misma del contrato de seguro y se convertiría en una fuente de enriquecimiento injustificado para el asegurado o beneficiario.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia proferida el 22 de julio de 1999 dentro del expediente 5065, precisó de manera categórica la naturaleza indemnizatoria de los contratos de seguro, señalando que:

*“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro, de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”*

En línea con lo anterior, el artículo 1088 del Código de Comercio reafirma este principio, estableciendo que: *“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso.”*

A partir de lo expuesto, es evidente que cualquier pretensión indemnizatoria que exceda los límites del daño efectivamente causado carece de sustento legal, pues su reconocimiento vulneraría el principio esencial del contrato de seguro.

Dentro del presente proceso, la parte demandante ha solicitado el reconocimiento de perjuicios morales y patrimoniales con cargo a la póliza de seguro contratada por el Municipio de Manizales. Sin embargo, tales pretensiones resultan improcedentes, toda vez que su otorgamiento generaría una transgresión del principio indemnizatorio, en la medida en que se traduciría en un beneficio económico injustificado para la parte actora.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el hecho generador del daño, esto es, el deslizamiento de tierra que dio lugar a la presente controversia, no fue ocasionado por el Municipio de Manizales ni por sus aseguradoras. En ese orden de ideas, aceptar el pago de las sumas pretendidas en la demanda no solo iría en contravía de la esencia misma del contrato de seguro, sino que también daría lugar a un eventual enriquecimiento sin justa causa de los accionantes, lo cual resulta inadmisibles en el marco del derecho de seguros.

Así mismo, es importante destacar que la carga de la prueba en materia de responsabilidad patrimonial del Estado recae sobre la parte demandante. Sin embargo, en el presente caso, no se han aportado elementos probatorios suficientes que permitan establecer la responsabilidad del ente asegurado en la ocurrencia del daño alegado. En consecuencia, reconocer el pago de una indemnización con cargo a la póliza de seguro implicaría no solo desconocer el carácter indemnizatorio del contrato, sino también suplir de manera indebida la carga probatoria que le correspondía a la parte actora.

A la luz de lo expuesto, se concluye que el contrato de seguro no puede ser concebido como un mecanismo para la obtención de ganancias por parte del asegurado o beneficiario, sino únicamente como un instrumento de resarcimiento dentro de los límites establecidos en la póliza y conforme al daño efectivamente sufrido.

En el caso concreto, la improcedencia de las pretensiones indemnizatorias planteadas en la demanda radica en que su reconocimiento vulneraría el principio fundamental del carácter indemnizatorio del seguro, dando lugar a un enriquecimiento sin justa causa en favor de la parte demandante. Por lo tanto, debe declararse probada la presente excepción y, en consecuencia, denegarse cualquier pretensión indemnizatoria que pretenda sobrepasar los límites de la cobertura pactada en la póliza de seguro.

#### **CAPÍTULO IV. PETICIÓN**

En mérito de lo expuesto, de manera respetuosa, ruego:

**PRIMERO:** Negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando probadas las excepciones de fondo y mérito presentadas por **EL MUNICIPIO DE MANIZALES** y en consecuencia se absuelva a mi representada a pago alguno por conceptos de indemnizaciones por los supuestos perjuicios alegados.

**SEGUNDO:** En el remoto evento en que los argumentos esbozados en el presente escrito no fueran de su convencimiento, no pierda de vista las limitaciones y exclusiones sobre la cobertura de la póliza con fundamento en la cual el **MUNICIPIO DE MANIZALES** llamó en garantía a mi representada, esto, de conformidad con las consideraciones expuestas por mi defendida en esta oportunidad procesal.

### CAPÍTULO V. NOTIFICACIONES

Al suscrito, en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 oficina 212 de la Ciudad de Cali (V), correo electrónico: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**  
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá  
T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.